

Inmigración, organización social y propuesta alternativa

MAURICIO VALIENTE OTS

Abogado, responsable del Área Ideológica del PCE

RESUMEN: Por mucho que avancen las posiciones xenófobas en el debate político actual y permeen a las sociedades de acogida, como lo están haciendo, la inmigración es una realidad que ha venido para quedarse y que, entre otras cosas, ha modificado la composición de la clase obrera, así como la mentalidad y las pautas de comportamiento de una parte significativa de la misma. No se trata de su consideración jurídico-administrativa, ya que, con el paso del tiempo, muchas de estas personas ya habrán adquirido incluso la nacionalidad española, sino de cómo contemplar en la construcción de un proyecto de cambio social a un conjunto de personas que desempeñan en un alto porcentaje ocupaciones en sectores precarizados y con un elevado grado de discriminación. Frente al intento de enfrentar a sectores de la clase trabajadora, los comunistas debemos ser capaces de promover la organización unitaria de la misma, lo que requiere tanto propuestas de políticas públicas alternativas como una actualización permanente del modelo de participación social y política.

En un momento en el que la inmigración se ha convertido en el elemento central de la ofensiva ideológica de la derecha, al mismo tiempo que la brutal práctica política de los países capitalistas pone cada día en evidencia su falta de compromiso con los derechos humanos, de cuya retórica se habían servido tradicionalmente para legitimarse y de paso atacar a los proyectos de construcción de sociedades socialistas, vale la pena repensar la alternativa que



debemos defender los comunistas, no solo desde el punto de vista programático, sino fundamentalmente desde la perspectiva de la organización de lo que constituye una parte considerable de la clase obrera. La interculturalidad como proceso de influencias mutuas en una doble dirección dentro de la sociedad es el enfoque que debe presidir también la acción política ante el fenómeno de la inmigración. No será fácil ni operará de modo automático.

Algunos sectores de la izquierda, siendo el más llamativo sin duda el encabezado por Sahra Wagenknecht en Alemania, han adoptado un discurso reactivo a lo que consideran una política de puertas abiertas que, a su juicio, no beneficiaría ni a las mayorías sociales de los países receptores ni a los propios inmigrantes o a sus países de origen. Se argumenta que la utilización de un exceso de oferta de mano de obra por los empresarios servirá para rebajar las condiciones laborales, que la descapitalización de profesionales o la simple pérdida de trabajadores jóvenes con mayor iniciativa social conllevan un empobrecimiento en los países que más los necesitan, después de haber invertido en su formación, y la vacuidad del discurso buenista que ignora la realidad de la lucha de clases en el origen, el tránsito y el destino de las migraciones.

Estos planteamientos críticos no son novedosos ni ajenos al permanente debate que ha mantenido la izquierda desde el incremento de los flujos migratorios en la segunda mitad del siglo xx, lo que llama la atención son sus puntos de coincidencia con la ofensiva xenófoba de las derechas a escala planetaria. Por supuesto que no quiero hacer un paralelismo ni en las intenciones ni con la concepción racista de los fascistas. Es más, creo que hay que agradecer el revuelo levantado por la posición mantenida por Sahra Wagenknecht, porque, más allá de cuestiones que tienen que ver con la crisis de Die Linke y la situación específica de lo que fue la República Democrática Alemana (el impacto del conflicto en Ucrania y el rechazo al alineamiento con las posiciones de la OTAN), ayudará a clarificar ideas y fortalecer un proyecto alternativo transformador.

La realidad de la inmigración

Lo fundamental que se puede reprochar a los planteamientos de la líder alemana es su carácter retórico, con un discurso que sitúa los términos del debate donde han querido plantearlos las élites de los países capitalistas. Construir un relato sobre los efectos de los desplazamientos de población como si fueran el resultado de una afluencia masiva descontrolada fruto del contenido de las legislaciones y las políticas públicas de los países de acogida, el famoso «efecto llamada» tantas veces utilizado, desvía la atención sobre las causas reales de la inmigración. Más allá de los planteamientos éticos y políticos que debemos mantener, un análisis detenido de las tendencias a largo plazo demuestra que



este enfoque es, sencillamente, falso. Las propias políticas de la Unión Europea y la histórica reacción actual evidencian que los progresivos endurecimientos de las políticas migratorias, la externalización y el aumento de los controles, generalizados al menos desde los años noventa del siglo pasado, no han disminuido la llegada de inmigrantes.

El número estimado de migrantes internacionales ha aumentado en las últimas cinco décadas de manera significativa. El total estimado de 281 millones de personas que vivían en un país distinto de su país natal en 2020 es superior en 128 millones a la cifra de 1990 y triplica con creces la de 1970. La pandemia no supuso más que un pequeño paréntesis en una tendencia de larga duración que responde a la fase de la globalización en el desarrollo del capitalismo. El desplazamiento de población ha sido una constante, aunque la intensificación producida podría tener un paralelismo con la que se produjo a finales del siglo XIX. No estamos hablando de un proceso puramente europeo, por ejemplo, en el ámbito específico de las personas refugiadas, el ACNUR señala que un 80% de los desplazados se encuentran en los países empobrecidos del llamado *Sur global*.

La realidad de la inmigración, la convivencia en las sociedades de un porcentaje que puede llegar hasta un cuarto de la totalidad de la población, forma ya parte de la geografía humana en la que deben operar las fuerzas revolucionarias. Alemania y España, que parten de una historia migratoria muy diferente, entre otras cosas por la emigración hacia el país centroeuropeo de los años sesenta, comparten hoy un porcentaje que supera el 20%, lo que da una idea del carácter acelerado de este proceso en el sur de Europa. A los datos de extranjería hay que añadir siempre la población que ya ha accedido a la nacionalidad, con plazos de adquisición mucho más cortos en nuestro país. Partamos pues de esta constatación; no se trata de una opinión, son hechos, una realidad sociológica sobre la que se tiene que operar.

La inmigración contemporánea, al igual que los movimientos de la población del campo a la ciudad que analizó Marx en el siglo XIX, es un proceso imparable que está provocado por la desigualdad creciente que ha sido extremada por el capitalismo globalizado. Pretender poner puertas al campo del «efecto expulsión» es una tarea abocada al fracaso. Enfrentar a esta realidad una retórica utilitarista (la inmigración salvará las pensiones de los países enriquecidos), catastrofista (la llegada masiva de extranjeros acabará con los servicios públicos y el «estado del bienestar») o beatífica (solo traerá beneficios por el enriquecimiento cultural que conlleva) no aporta más que coartadas para proyectos políticos o en el mejor de los casos fundamenta actitudes estéticas. La izquierda transformadora, máxime si se reclama del marxismo para fundamentar su política, no debe articular su construcción programática en esos términos.



Espejismos ante una coyuntura compleja

La extrema derecha ha alimentado su escalada de popularidad sobre una retórica antiinmigración, efectiva a medio plazo porque permite movilizar a sectores importantes de la población afectados por la incapacidad del capitalismo de responder a sus expectativas, pero que la conducirá inexorablemente a un callejón sin salida. El ridículo de Giorgia Meloni con sus centros de detención en Albania, tan bien dotados como vacíos, es un adelanto de lo que le puede suceder en el futuro a Donald Trump. Por muchas fanfarronadas que escenifique. Desde luego que las políticas restrictivas van a provocar más sufrimiento, discriminación, exclusión social y muertes en el tránsito, pero, no van a conllevar un cambio de tendencia en el desplazamiento de población, más allá del desvío temporal de alguna de las rutas migratorias.

Aunque la presión de la derecha en alza sea implacable, la demagogia del falso humanitarismo de algunos sectores oficiales provoque náuseas y la ingenuidad de algunos movimientos agote, desde la izquierda debemos huir de este marco retórico del debate que pretenden imponernos. Por mucho que la ofensiva xenófoba permee en la clase trabajadora, la esterilidad de este enfoque se evidencia cuando pasamos a las alternativas que defendemos. A los que se entusiasman por la retórica de Sahra Wagenknecht en materia migratoria les podemos emplazar a que concreten. ¿Qué propuestas debemos defender? ¿Apoyar el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA)? ¿Sumarnos al modelo migratorio restrictivo que ha construido la derecha y la socialdemocracia en la UE? ¿Mirar hacia otro lado ante las muertes en el tránsito o las violencias policiales? La reciente foto en el Bundestag de la histórica votación sobre políticas migratorias, donde la derecha y la extrema derecha han podido sacar su posición con la abstención de la lista de Sahra Wagenknecht, es un buen ejemplo de las consecuencias nefastas de una estrategia equivocada. Por penoso que resulte en el contexto de la hegemonía política de la derecha xenófoba, la única alternativa de la izquierda es construir un modelo de integración intercultural con derechos e igualdad de trato en el marco de la construcción de un proyecto para la transformación social radical de nuestras sociedades, que no podrá avanzar sin un nuevo orden en las relaciones internacionales.

La política del actual gobierno de coalición en España ha suavizado las aristas más extremas del modelo construido por el PSOE y el PP desde los años ochenta del siglo pasado, acorde con las líneas generales adoptadas por la Unión Europea, como se ha podido comprobar con la reciente aprobación de un nuevo Reglamento de Extranjería. No carece de valor que se haya conseguido en un contexto tan desfavorable. Sin la movilización social y la presencia de la izquierda en el parlamento y en el gobierno hubiera sido impensable. Aunque España sea una excepción en el contexto europeo, las contradicciones son tan evidentes como el apoyo del PSOE al PEMA, las políticas restrictivas



del Ministerio del Interior y la ampliación de las figuras del arraigo como vía de acceso a la residencia (un instrumento de regularización permanente que surgió de la movilización social en los años noventa del siglo pasado). Criticar el error de dejar de apreciar lo alcanzado, el «cuanto peor mejor» que solo se les puede pasar por la cabeza a quienes contemplan la escena desde la comodidad de su ilusoriamente alternativo modo de vida, no nos debe hacer caer en la idealización de un modelo que no ha cambiado en lo sustancial.

La necesaria organización de la mayoría social trabajadora

La base de un modelo alternativo debe huir del paternalismo y concebir a los trabajadores migrantes como sujetos de derechos y deberes, como el conjunto de las personas a las que se dirige nuestra acción política. Se trata de uno de los sectores de la clase obrera que sufre más precariedad y con más intensidad las carencias en materia de vivienda y derechos sociales. Por ello, el primer paso de esta necesaria orientación es su organización en el sindicalismo, en el movimiento obrero y en el conjunto de las organizaciones sociales que reivindican la garantía de necesidades básicas desde unos servicios públicos de calidad. Aunque sea un matiz en la forma de hablar, no carece de importancia reflexionar sobre la utilización de expresiones como «incorporación» o «integración», que pueden dar una impresión de unilateralidad. Se trata de articular el tejido social con toda su complejidad, lo que conllevará construir una cultura acorde con la misma, tanto en las formas como en los discursos y los cauces organizativos.

Más allá de la garantía del derecho al voto, una posición mantenida en solitario por Izquierda Unida entre las fuerzas políticas durante mucho tiempo en los programas y la movilización, que se enfrenta a límites constitucionales difíciles de superar, el reto es construir una participación activa a todos los niveles en pie de igualdad, algo de lo que estamos todavía muy lejos y que no depende solo de las políticas públicas. Las organizaciones que son la expresión de la acción social o política de la clase obrera deben asemejarse a la composición de la misma. No debemos construir una política para la inmigración o centrar nuestra reivindicación desde el enfoque de la solidaridad, se trata de cómo construir juntos un proyecto de país con una identidad centrada en la memoria democrática y la lucha por los derechos, en un nuevo orden internacional cada vez más necesario.

En un reciente seminario de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras para debatir sobre el Reglamento de Extranjería aprobado por el gobierno, con participación de organizaciones de toda Europa, se constataba la dificultad de aumentar la afiliación de los extranjeros y su participación en las



estructuras de responsabilidad a todos los niveles. No solo en países de inmigración reciente y más acelerada, como el caso español, sino también en otros como Francia o el Reino Unido, con décadas de experiencia en este sentido. Es una realidad que conocemos bien y que va más allá de las dificultades de la izquierda política y social para extender o simplemente mantener su base militante. Prueba que no es una simple cuestión de voluntad, de buenos deseos, sino de ajuste a una realidad que requiere cambios. Fracasar en este sentido podría alimentar la trampa de la diversidad, dar pie a procesos de organización que tuvieran como origen y como resultado la fragmentación del único sujeto que puede articular una mayoría social alternativa. Que las dificultades de afiliación sean fruto de los sectores donde ejercen su actividad es evidente, pero también lo es que opera una discriminación que atraviesa toda la sociedad y que exige estrategias de superación.

Si en la preparación de la alternativa de la sociedad que defendemos se prefigura el país que se pretende construir, la organización de la clase obrera no puede ser una excepción. La falta de afiliación no responde solo a que las prioridades de las personas que viven una especial precariedad sean otras, hay experiencias que demuestran lo contrario, también en el proceso de emigración española durante la última etapa del franquismo. Ante la centralidad que está tomando en este momento la lucha por el derecho a la vivienda, recordemos el papel que desempeñó en especial la comunidad ecuatoriana en el movimiento contra los desahucios en la crisis que comenzó en 2007, donde la coordinación de las organizaciones políticas a ambos lados del océano tuvo resultados palpables. En este sentido, desarrollar el internacionalismo con la implicación y el conocimiento de las luchas en el planeta, con la valoración de los cuadros de las organizaciones que están presentes en la emigración y el intercambio de experiencias, no es un factor desdeñable, aunque los resultados no se dejen ver a corto plazo.

Propuestas para un modelo alternativo

Para el desarrollo organizativo es crucial plantear en su justo término lo que se reivindica con carácter social general y lo específico de un sector de la población con necesidades diferenciadas. La plataforma programática debe partir del acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos, evitando consolidar compartimentos estancos con políticas específicas, una tentación en la que a veces se cae con buenas intenciones pero que nos conduce de nuevo a la trampa de diversidad. Luchamos por garantizar el acceso a la vivienda como derecho constitucional. Que tengan que existir medidas antidiscriminatorias para determinados colectivos no está en cuestión, pero tanto en la formulación como en el énfasis la izquierda tiene que ser capaz de plantear



qué es lo esencial en la construcción de las políticas públicas. En este sentido, una clave para el cambio de modelo es que las políticas públicas no orbiten bajo el peso abrumador del Ministerio del Interior. La gestión de la residencia («los papeles» en el lenguaje cotidiano) debe ocupar un lugar marginal, con un sistema ágil y rápido que evite el absurdo gasto de tiempo y de energías, apostando por procesos rápidos de nacionalización como los adoptados históricamente por los países receptores de inmigración.

La atención a la emergencia y el respeto del derecho de asilo, en un mundo que desde el idílico final de la historia proclamado por los capitalistas ha multiplicado por tres el número de desplazados forzados en el mundo, debe ser una seña de identidad de un Estado democrático y de las propuestas de la izquierda transformadora. Hasta ahora se ha puesto el foco en las crisis de llegadas con una nula previsión y una respuesta siempre insuficiente, algo que está en el origen de buena parte de las campañas demagógicas de la derecha xenófoba. La gestión de la crisis ucraniana desmintió la existencia de una capacidad de acogida rígida y sin alternativas. Atender a las personas que llegan en condiciones de seguridad y dignidad permitirá desplazar el foco a lo que en realidad importa: las causas que han generado más guerras y más desigualdad en el planeta.

En conclusión, debemos desarrollar un modelo de atención a la realidad de la inmigración. Un modelo, si se quiere, de inclusión, por utilizar la terminología de la ley, que no esté desligado del proceso de transformación social que deseamos para nuestro país y el conjunto del planeta, con la participación y el protagonismo de la mayoría social. No es una utopía, es una realidad que enfrenta grandes dificultades. La alternativa no es desmoralizarse ante el avance momentáneo de la extrema derecha y ceder a su discurso, sino organizar, movilizar y dotar de un programa alternativo a la mayoría social para acabar con la barbarie del capitalismo globalizado que nos ha tocado vivir. ★

